

JUICIO: OLAZ LUIS ALBERTO c/ BOCCA MARIA GABRIELA s/ COBRO DE PESOS-EXPTE. N°: 840/13.-

San Miguel de Tucumán, 5 de julio de 2023.

AUTOS Y VISTOS: Vienen los autos del título "JUICIO: JUICIO: OLAZ LUIS ALBERTO c/ BOCCA MARIA GABRIELA s/ COBRO DE PESOS-EXPTE. N°: 840/13." los que se tramitaron por ante este Juzgado del Trabajo de Primera Instancia de la VI Nominación, para el dictado de sentencia definitiva, de cuyo estudio

RESULTA:

En fecha 06/06/13 (f. 5/9) se apersonó la letrada Ana Cristina Robles en representación de Luis Alfredo Olaz, DNI N° 33.632.111, con domicilio en calle Venezuela N°2511, de esta ciudad y demás condiciones personales que constan en poder *ad litem* (f. 12). En tal carácter inició acción por cobro de pesos en contra de María Gabriela Bocca por la suma de \$113.259,06, en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, integración mes despido, vacaciones proporcionales, SAC s/vacaciones, SAC proporcional, indemnización de los arts. 8 y 15 de la Ley N° 24013, multa de art. 80 de la LCT, y diferencias salariales.

En dicha oportunidad relató que su mandante ingresó a trabajar para la demandada en octubre de 2005, en la categoría de mozo del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N°479/06 (UTHGRA), categoría de personal 3, confitería "B", realizando tareas de mozo, cadete y repartidor.

En cuanto a la jornada laboral del actor, precisó que trabajaba de lunes a lunes con un día de descanso, en turnos rotativos, salvo los sábados que trabajaba doble jornada. Agregó que la remuneración percibida ascendía a \$2.400 y la devengada a \$3.193.

Explicó que su primera etapa de trabajo lo hizo en la pizzería con nombre de fantasía Pizza Nuova de Avda. Roca N°363, y que la patronal lo registró fraudulentamente como pasante del Instituto Americano, lo cual no fue así ya que nunca asistió a ese lugar. Añadió que a partir del año 2008 fue trasladado a la sucursal de San Juan y Laprida.

Continuó relatando que en fecha 27/02/12 sufrió un accidente *in itinere* y que por ello en fecha 07/03/12, mediante telegrama laboral (en adelante TCL), denunció extremos de la relación laboral, intimó su debida registración, el pago de los días caídos, diferencias de haberes y, puso a disposición certificado médico por

conjuntivitis bilateral, todo ello bajo apercibimiento de considerarse despedido por su exclusiva culpa.

Luego, indicó que la demandada respondió la misiva mediante carta documento (en adelante CD) de fecha 15/03/12 en la cual rechazó lo denunciado haciendo caso omiso a los derechos que por ley le corresponden.

Por ello, en fecha 14/03/12 remitió TCL, rechazando la misiva anterior, reiteró TCL enviado e hizo efectivo el apercibimiento al considerarse gravemente injuriado y despedido por exclusiva culpa del empleador, además de intimar el pago de liquidación final e indemnizaciones de ley.

A continuación, señaló que recibió CD de la demandada de fecha 15/03/12 en la que rechazaba su pretensión y lo intimaba a retomar tareas bajo apercibimiento de abandono de trabajo y otro de fecha 20/03/12 por el cual rechazaba su reclamo indemnizatorio y que ponía a disposición la liquidación final.

Finalmente, fundó su derecho, practicó planilla de rubros, ofreció pruebas y solicitó se admita la acción condenándose al pago de la suma reclamada con más sus intereses, gastos y costas.

Mediante escrito de fecha 06/08/13 (f.68), la letrada Ana Cristina Robles acompañó documentación original, la que fue reservada en caja fuerte del Juzgado, conforme proveído de fecha 12/08/13 (f.70).

Corrido el traslado de ley, se apersonó el letrado Julián Colombres, apoderado de María Gabriela Bocca, conforme fotocopia del poder general para juicios adjuntado a f.50, en dicha oportunidad solicitó la subsanación de defectos y omisiones de la demanda.

Cumplido y subsanado por la actora dicho requerimiento, mediante escrito de fecha 19/02/14, el letrado Julián Colombres contestó demanda, planteó inconstitucionalidad de los arts. 47, 50, 82, 102, 133, 134 y 135 del CPL y solicitó el rechazo de la acción iniciada en contra de su mandante.

Luego de efectuar una negativa ritual, brindó su versión de los hechos. En primer lugar, reconoció la existencia de la relación laboral, pero aclaró que su inicio fue a través de la Fundación para el Desarrollo Regional (FUDERE) y en el marco del convenio y la Ley N°25165, por ello suscribió con el actor (estudiante de administración de empresas) en fechas 15/06/2006, 01/02/2007, 02/05/2008 y 05/08/2008, un acuerdo de pasantía educativa que en todos y cada uno de los casos duró tres meses.

Continuó relatando que en fecha 12/06/2008 se extinguió el vínculo de pasantía y en fecha 19/06/2008 ingresó a trabajar mediante un contrato a plazo fijo que luego pasó a ser un contrato por tiempo indeterminado hasta el momento de su extinción.

Explicó que, dada la carga horaria del actor el contrato siempre fue a tiempo parcial, trabajando turnos rotativos de 6 días por semana, 5 horas diarias conforme a lo normado por los arts. 37 y 38 del CCT N° 479/06, por lo que consideró que estuvo correctamente registrado.

En cuanto al distracto, señaló que el actor en el mes de febrero de 2012 comenzó a faltar sin aviso ni justificación y en fecha 07/03/12 recibió TCL reclamando una improcedente registración y alegando una supuesta enfermedad que hasta el día de hoy no fue justificada.

Por ello, remitió CD de fecha 09/03/12 y rechazó la misiva intimándolo a que se presente una vez que obtenga el alta laboral.

Explicó que luego de ratificar las misivas el actor en fecha 14/03/12 se declaró injuriado y produjo el despido indirecto. Como consecuencia indicó que en fecha 20/03/12 rechazó la misiva por improcedente.

Concluyó impugnando y argumentando la improcedencia de rubros reclamados, ofreció prueba, formuló reserva del caso federal y solicitó se rechace la demanda con imposición de costas.

Mediante sentencia de fecha 28/07/14 (fs.138/139) se rechazó el planteo de inconstitucionalidad planteado por la demandada. Aquella fue confirmada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala 3, en fecha 28/10/15 (fs.170/171).

A continuación, por decreto de fecha 03/03/16 (f.177), se dispuso la apertura de la causa a prueba al solo fin de su ofrecimiento.

En fecha 01/11/16 se celebró audiencia de conciliación prevista en el art. 69 código procesal laboral (CPL), cuya acta dió cuenta de la comparecencia del letrado apoderado de la parte demandada mientras que por la parte actora no lo hizo persona alguna. Como consecuencia se hizo efectivo el apercibimiento normado por el ex art. 73 del CPL y se tuvo por desistida la demanda accionada por la parte actora.

A continuación en fecha 10/11/2016 (fs.207), la letrada Ana Robles, apoderada del actor, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de lo resuelto en la referida audiencia. Aquel recurso fue rechazado mediante sentencia de fecha 04/05/17 (f.214) y se concedió la apelación.

Luego, mediante sentencia de fecha 08/05/19 (fs.268/269) la Excma. Cámara del Trabajo, Sala 3, revocó lo resuelto en la mencionada audiencia y ordenó tener por intentada la conciliación normada por el art. 73 del CPL.

Mediante escrito de fecha 25/11/19 (f.283) se apersonó el letrado Fernando A. Vera como apoderado de la demandada. Como consecuencia mediante decreto de fecha 26/11/19 se le dio la pertinente intervención de ley.

Posteriormente el referido letrado, mediante escrito de fecha 24/09/20 renunció al poder conferido oportunamente y por ello por decreto de fecha 28/09/20 se ordenó notificar a la demandada a fin de que comparezca por sí o con nuevo apoderado, bajo apercibimiento de notificar las sucesivas providencias en los Estrados del Juzgado con las excepciones previstas en el art. 22 CPL

Luego, mediante decreto de fecha 25/10/21, ante el incumplimiento de la demandada se hizo efectivo el apercibimiento allí ordenado. Por otro lado, se procedió a proveer las pruebas oportunamente ofrecidas en los respectivos cuadernos de prueba.

A continuación por escrito de fecha 17/11/21 se apersonó el letrado Marcelo Esteban Jiménez Santillán como apoderado de la demandada.

Como consecuencia mediante decreto de fecha 19/11/21 se le dio la pertinente intervención de ley.

Mediante escrito de fecha 23/11/21 se apersonó el letrado Antonio José Giménez como apoderado del actor, sin revocar poder otorgado a la letrada Ana Cristina Robles.

Ante ello, mediante decreto de fecha 01/12/21 se le dio la pertinente intervención de ley.

Concluido el período probatorio, en fecha 03/11/22 se produjo el informe del Actuario sobre las pruebas ofrecidas y producidas de las que surgió que la actora ofreció las siguientes: 1) Prueba documental: producida (fs.301/302 y actuaciones digitales), 2) Prueba informativa: parcialmente producida (fs.303/304 y actuaciones digitales), 3) Prueba informativa: producida (fs. 305/306 y actuaciones digitales), 4) Prueba confesional: sin producir (fs.307/310 y actuaciones digitales) , 5) Prueba testimonial: producida (fs.311/312 y actuaciones digitales), 6) Prueba pericial contable: sin producir (fs.313 /314 y actuaciones digitales); parte demandada: 1) Prueba documental: parcialmente producida (fs.315/316 y actuaciones digitales), 2) Prueba testimonial: parcialmente producida (fs. 317/318 y actuaciones digitales) e incidente de tacha, 3) Prueba informativa: parcialmente producida (fs.319/320 y actuaciones digitales), 4) Prueba reconocimiento: sin producir (fs.321/322 y actuaciones digitales).

La parte actora presentó su alegato en fecha 10/11/2022, mientras que la demandada no lo hizo.

A continuación, mediante providencia de fecha 28/02/2023 se dispuso pasar los autos a despacho para el dictado de sentencia definitiva.

Luego, mediante escrito de fecha 29/03/23 la parte actora presentó alegatos sobre incidente de tacha.

Mediante decreto de fecha 31/03/23 se lo devolvió por extemporáneo y como consecuencia mediante decreto de fecha 10/04/23 se ordenó pasar los autos a despacho para resolver.

Finalmente, mediante nota actuarial de fecha 28/04/23 se pasaron los autos para dictar sentencia definitiva, dejando la causa en condiciones de ser resuelta.

CONSIDERANDO:

De acuerdo a los términos de la demanda y su contestación, resultan hechos admitidos, expresa o tácitamente por las partes, y por ende, exentos de prueba: 1) La existencia de una relación laboral entre Luis Alfredo Olaz y María Gabriela Bocca. 2) El desempeño del actor como mozo y su registración laboral en dicha categoría conforme al CCT N° 479/06. 3) Intercambio telegráfico entre las partes.

En consecuencia, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las que este sentenciante deberá expedirse (art. 214 inc. 5 del CPCC supletorio) son las siguientes: 1) Extremos y naturaleza de la relación existente entre las partes: fecha de ingreso, jornada y remuneración devengada. 2) Causal de extinción de la relación laboral su justificación. 3) Procedencia de los rubros y montos reclamados, intereses, planilla de condena; 4) costas y honorarios.

Para la resolución de los puntos de conflicto serán de aplicación las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20744 (en adelante LCT) y el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 479/06. Así lo declaro.

PRIMERA CUESTION:

Extremos y naturaleza de la relación existente entre las partes.

El actor denunció que ingresó a trabajar bajo relación de dependencia en octubre de 2005 y que la demandada lo registró fraudulentamente como pasante del Instituto Americano, al que nunca asistió.

Por su parte, el accionado afirmó que suscribió con el actor (estudiante de administración de empresas) en fechas 15/06/2006, 01/02/2007, 02/05/2008 y 05/08/2008, un acuerdo de pasantía educativa con Fundación para el Desarrollo Regional (FUDERE) en el marco de la Ley N°25165, que en todos y cada uno de los periodos duró tres meses y que luego de la extinción del vínculo de pasantía en fecha 19/06/2008 ingresó a trabajar mediante un contrato a plazo fijo que luego pasó a ser un contrato por tiempo indeterminado hasta el momento de su extinción.

Al respecto resulta importante destacar lo previsto por la Ley N° 20744 en relación con la presunción de la existencia del contrato de trabajo, cuyo art. 23 establece que la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven

se demostrase lo contrario y que esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Nuestro Máximo Tribunal Provincial -enrolándose en una interpretación restrictiva de la norma- sostiene que la prestación de servicios que genera la presunción es aquella que se efectúa bajo la dependencia o subordinación de otro, pues sólo éstos elementos son los que se contemplan en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo (arts. 21 y 22, LCT) y, por lo tanto, la carga de la prueba de la posición de dependencia o subordinación no resulta alterada por la presunción, sino que, por el contrario, de esa prueba depende que aquélla entre a jugar (CSJ de Tucumán, 29/11/2006, “Medina, Socorro del Carmen c/Sucesión de Carlos Santillán y otros s/Despido”). Con lo cual, para activar la conjetura del art. 23 de la LCT, no resulta suficiente la prueba de la prestación de servicios -hecho que se encuentra reconocido- sino que debe probarse el hecho de la prestación en condiciones de dependencia o subordinación respecto de la demandada.

Para valorar la posición del accionado, considero menester señalar que la Ley N° 25126, de creación de pasantías educativas, promulgada el 06/10/1999 (vigente en la época reclamada por el accionado), define la “Pasantía” en su art. 2 como la extensión orgánica del sistema educativo en el ámbito de empresas u organismos públicos o privados, en los cuales los alumnos realizarán residencias programadas u otras formas de prácticas supervisadas relacionadas con su formación y especialización, llevadas a cabo bajo la organización y control de las unidades educativas que lo integran y a las que aquéllos pertenecen, según las características y condiciones que se fijan en convenios bilaterales estipulados en dicha ley. A su vez, el Decreto n° 340/92 de fecha 24/02/1992 -de aprobación del sistema de pasantías dictado en el marco del “Plan de transformación educativa” impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional-, la define en similares términos como extensión orgánica del sistema educativo a instituciones de carácter público o privado para la realización, por parte de los alumnos y docentes, de prácticas relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la especialización que reciben, bajo organización y control de la institución de enseñanza a la que pertenecen, durante un tiempo determinado. También dicta aquella ley que sólo serán reconocidos los convenios que se celebren con acuerdo a las presentes normas y sólo la firma, y el debido registro de los mismos hará posible la situación de pasantía (art. 5). Es decir que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos (formales o materiales) para su configuración, hará perder el carácter de pasantías del contrato invocado, con lo cual se habilitará la aplicación de las normas de la LCT que rigen la relación de trabajo.

Según ello, el contrato de pasantías es aquel que tiene por objeto la práctica profesional del estudiante en el marco de la especialización en la cual cursa sus estudios, lo que se considera como un complemento de su especialidad teórica y presupone la intervención de una entidad educativa y un sujeto de derecho público o privado entre los cuales se celebra un convenio marco -con el objeto de regular los objetivos generales del mismo- según las pautas y finalidades establecidas en la ley de rito (brindar experiencia práctica complementaria de la formación teórica elegida que habilite para el ejercicio de la profesión u oficio, capacitar a los alumnos en el conocimiento de las características fundamentales de la relación laboral, formar al estudiante en aspectos que le serán de utilidad en su posterior búsqueda laboral, ofrecer la posibilidad de conocer y manejar tecnologías actualizadas, etc.) y requiere la registración de dicho convenio ante la autoridad de aplicación.

Entonces, admitida la prestación de servicios se mantiene latente la admisibilidad de la presunción del art. 23 LCT respecto de su carácter laboral y por ser el contrato de pasantías un régimen excepcional que se aparta de las normas de orden público laboral y que es de interpretación restrictiva -lo que acarrea que quien lo alega debe acreditar los extremos que lo constituyen- me adentraré al examen de las pruebas de autos para decidir.

La parte actora ofreció prueba testimonial en CPA N°5. En fecha 17/11/21 prestó declaración la testigo Veronica Gomez, en fecha 20/12/21 Mehia Masmud Muhamad, en fecha 23/03/22 Cristian Vergara y Felix Rocha.

Aquellos fueron coincidentes en señalar que trabajaron para la demandada y que conocieron al actor por haber sido compañeros de trabajo, que los hacían figurar como pasantes del instituto Americano pero que no estudiaban allí, que trabajaban en negro.

Respecto a la fecha de ingreso del actor Vergara y Muhamad lo vieron trabajar desde el año 2005 mientras que el resto de los testigos por haber ingresado después de esa fecha solo indicaron conocer su ingreso por la versión dada por el actor.

También fueron coincidentes en señalar que respecto a la jornada laboral la cumplía en turnos rotativos de lunes a lunes con un día de descanso con 6 horas diarias.

Resulta importante destacar que aquellos no fueron objeto de tacha por las partes, no dudo de su veracidad, por cuanto los referidos testigos declararon sobre hechos y circunstancias conocidas por los mismos, en forma directa y personal. Adviértase que la mayoría de ellos fueron compañeros de trabajo del actor, lo que los inviste con el carácter de testigos necesarios, a los fines del esclarecimiento y dilucidación de la cuestión debatida.

Por su parte si bien la demandada ofreció prueba documental consistente en acuerdos individuales de pasantía de fechas 15/5/2006, 6/2/2007, 10/5/2007 y 15/05/2008, duplicado de alta de AFIP de fecha 1/2/2007, duplicado alta de AFIP de fecha 5/5/2008, duplicado baja de AFIP de fecha 19/06/2008 y contrato de plazo fijo de fecha 19/06/2008. De los que surge la intervención de FUDERE, la demandada y una aparente firma del actor.

Al respecto ofreció prueba de reconocimiento de aquella documental y pericial caligráfica, sin embargo la demandada por falta de diligencia no logró producirla y de esa manera acreditar la pasantía alegada. Respecto a las altas de AFIP aquellas resultan de una actividad unilateral de la demandada.

Finalmente también ofreció prueba testimonial en CPD N°2 en el que en fecha 18/11/21 prestó declaración la testigo Cintya Rodríguez, al respecto su versión luce imprecisa y vaga por cuanto refiere “yo creo que trabajaba en la pizzería”, “tengo entendido que el ya trabajaba antes”, preguntada por la jornada indicó “Los horarios exactos no, pero trabajábamos 6 días a la semana 5 horas, y eran turnos rotativos”, o por su fecha de ingreso “En el 2009, exactamente no me acuerdo”.

Por otro lado, preguntada por las pasantías indicó “Luis me comentaba que el también hizo cursos en el mismo lugar”.

Por ello ante lo impreciso y vago de su versión sumado a que en cuanto a lo que sabe de las pasantías es una referencia brindada por el actor y no una percepción directa disminuye su valor probatorio al respecto.

Todo lo antes meritado, dan cuenta que los servicios cumplidos por el actor para la demandada y dentro de lo que constituirían funciones de mozo son los de una típica relación de dependencia (art. 22 y 23 LCT), que nada tiene que ver con el régimen de pasantía invocado por la accionada, toda vez que... “más allá del nombre que las partes utilicen en sus negocios jurídicos y por encima del ropaje instrumental a que recurran, es tarea propia e indeclinable del intérprete calificar el vínculo según sus características propias y establecer sus notas relevantes en función de las normas de cuya aplicación se trate”. (CNTrab., sala V, abril 27-989-Hoteles Sheraton de Argentina; A 984).

Resulta importante destacar que los objetivos de la ley de pasantías n° 25165 (vigente al momento del inicio de la relación entre la actora y demandada), expuestos en arts. 2 y 3, se traducen en la práctica complementaria de la formación teórica elegida que habilite a los estudiantes para el ejercicio de la profesión u oficio elegidos. Está claro que para que ello tenga lugar, es indispensable que se trate de alumnos regulares de algún tipo de carrera y que reúnan determinados requisitos (art. 13 ley cit.), que el trabajo realizado guarde relación directa con la materia

elegida a los fines de su capacitación y que exista un control estricto por parte de la Institución Educativa respecto de los objetivos establecidos (art. 18 ley 25165).

Ninguno de estos supuestos se han cumplido en el caso de autos, partiendo del hecho más significativo que la accionada no acreditó que el actor fuera alumno regular de institución educativa alguna, y aún en el hipotético caso de que lo fuera de la carrera de administración de empresas (como afirma en su responde), su preparación teórica no guarda ninguna vinculación con las tareas de mozo que ejecutaba a favor de la demandada, lo que obsta lisa y llanamente a la implementación del sistema de pasantías.

Como consecuencia de lo expuesto, se concluye que el vínculo laboral habido entre las partes tuvo carácter laboral, y por ende regido por la ley 20744, que prevé la nulidad de los contratos con condiciones menos favorables para el trabajador (art. 7 LCT), y las que supriman y reduzcan los derechos previstos en la LCT, así como las que evidencien simulación o fraude aparentando normas contractuales no laborales (art. 14 LCT), porque la prestación de servicios hace presumir la existencia de contrato de trabajo (arts. 21, 22, 23 LCT), y resultan inadmisibles las presunciones en contra de los derechos del trabajador.

En este sentido concluyo que entre octubre de 2005 y el 19/06/2008 en que la demandada reconoció la relación laboral mediante un contrato de plazo fijo y hasta el 14/03/12 fecha de la extinción de la relación laboral debe regirse por la Ley N° 20744. Así lo declaro.

Finalmente en cuanto a su fecha de ingreso, conforme surge del material probatorio reseñado si bien los testigos Muhamad y Vergara, mencionaron como fecha el año 2005 sin especificación del día y mes, de dichos testimonios si surge que el actor habría comenzado la relación laboral con la demandada con anterioridad a la fecha en que fue registrado.

Es por todo ello que tomaré como acreditada la fecha denunciada en escrito inicial de demanda en octubre de 2005. Así lo declaro.

Jornada de trabajo.

El actor afirmó trabajar en una jornada de lunes a lunes con un día de descanso, en turnos rotativos, salvo los días sábados que trabajaba se trabajaba en jornada nocturna.

Mientras que la accionada señaló que cumplía una jornada a tiempo parcial trabajando turnos rotativos de 6 días por semana, 5 horas diarias conforme a lo normado por los arts. 37 y 38 del CCT N° 479/06, por lo que consideró que estuvo correctamente registrado.

A la hora del análisis de este hecho tengo en cuenta lo siguiente: jurisprudencial y doctrinariamente es admitido que como regla general la jornada de

trabajo se presume por tiempo completo, siendo a cargo de las partes la prueba de una jornada reducida o extraordinaria. Así, el art. 198 de la LCT dispone:” jornada reducida. La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las características de la actividad.” La norma transcripta sujeta “la reducción de la jornada máxima legal” a la existencia de una estipulación, de suerte que quien invoque la existencia de dicha convención deberá demostrarla (Ojeda, Raúl Horacio; “Ley de Contrato de Trabajo Comentada y concordada”, 2da. Ed. Santa Fe; RubinzalCulzoni, 2011, Tomo II, página 71).

En ese sentido se ha considerado que: “...la carga de la prueba de la jornada reducida corresponde al empleador que la invoca” (conf. CSJT. sent. Nº760/2012; 852 /2017; 76/2017; 644/2016).

En ese contexto surge que la jornada normal de trabajo es la regla, en tanto que la reducida es la excepción, la que sólo puede ser establecida –conforme se infiere de la norma- por las disposiciones legales que reglamenten la materia.

En merito a todo lo expuesto y dada la disparidad de las posiciones mantenidas por las partes respecto de esta cuestión (pues la demandada negó esa jornada), cabe resaltar que no existe en autos prueba alguna que desvirtúe la presunción antes señalada. A mayor abundamiento la versión de los testigos valorados en el tópico precedente dieron cuenta de la jornada denunciada por el actor.

Como consecuencia en ese contexto y con tales precedentes considero que el actor prestaba servicio para la accionada en jornada completa de trabajo. Así lo declaro.

Remuneración devengada

El actor denunció que percibió una remuneración de \$2.400 debido a la jornada de tiempo parcial en que se lo había registrado y que conforme a su real jornada la remuneración devengada a la fecha del distracto su básico debió ascender a \$3.193 más los adicionales de ley.

Conforme fue resuelto en la cuestión precedente, se determinó una deficiente registración en cuanto a la fecha de ingreso y jornada laboral del actor y según surge de las escalas salariales a esa época cotejada con los recibos de sueldo adjuntados a fs.23/49, la remuneración percibida por el actor resultaba inferior a la que le correspondía. Así lo declaro.

En cuanto a la remuneración devengada que correspondía a la parte actora al momento del despido, corresponde considerar que surge del informe de

UTHGRA de fecha 20/12/21, las escalas salariales vigentes para el periodo marzo del año 2012. Según ello, el salario básico para la categoría del actor (mozo categoría 3) categoría del establecimiento "B", ascendía a la suma de \$2.497,86 más los adicionales de ley por el importe arrojando el total de \$3.968,10.

En ese sentido y con tal precedente, la demandada liquidó y abonó conceptos tomando como base un importe inferior al señalado, por la suma de \$2.027,60 más los adicionales de ley por \$464,93 arrojando un total de \$2.492,53.

Como corolario de lo expuesto, la remuneración devengada a la época del despido era de \$2.492,53, más los adicionales previstos en la normativa convencional. Así lo declaro.

SEGUNDA CUESTION:

Extinción de la relación laboral, causal de despido y justificación del mismo.

Para el tratamiento de la extinción de la relación laboral resulta conducente el examen de las misivas adjuntadas por las partes y reconocidas por aquellas.

El actor señaló que, en fecha 07/03/12, intimó el pago de salarios caídos, reconocimiento de su licencia médica, pago de diferencias salariales y la correcta registración de los extremos de la relación laboral (fecha de ingreso y jornada laboral), todo ello bajo apercibimiento de considerarse despedida por su exclusiva culpa.

Luego, mediante CD de fecha 09/03/12, la demandada rechazó lo denunciado negando los extremos de la relación laboral, reconoció la licencia médica e intimó retome tareas una vez obtenida el alta médica, bajo apercibimiento de abandono de trabajo.

Por ello, remitió TCL de fecha 14/03/12 e indicó que ante la falta de respuesta positiva hizo efectivo el apercibimiento, considerándose gravemente injuriado y despedido por exclusiva culpa del empleador. Además intimó el pago de liquidación final, entrega de la certificación de servicios y remuneraciones e indemnizaciones de ley.

Del análisis del intercambio epistolar, concluyo que la extinción del vínculo se produjo por denuncia del contrato de trabajo que efectuó la actora mediante TCL de fecha 14/03/12, debiéndose tomar esta fecha a los fines de tener por configurado el distracto por ser temporalmente la primera manifestación de voluntad rescisoria y teniendo en cuenta que la epístola fue reconocida por la demandada. Esta conclusión configura una excepción a la teoría recepticia ya que no existen elementos que permitan determinar la fecha de la efectiva entrega al destinatario (*cfr. criterio sostenido en "Espíndola de Solorza Rosa c/ Díaz César*

Manuel s/ Indemnización por despido", sentencia nro. 132 del 17/05/18, Cámara del Trabajo Sala 2- Concepción; "Romano Enrique Sebastián c/ Rosso Hmnos. SH y otros s/ Indemnización por despido", sentencia nro. 508 del 21/11/16, Cámara del Trabajo Sala II y "Nuñez Luis Alberto vs. Colón SRL s/ Cobro de pesos", sentencia nro. 340 de fecha 23/12/15, Cámara del Trabajo Sala II). Así declaro.

En mérito a lo expuesto, el actor invocó como causales del despido, la deficiente registración en cuanto a su fecha de ingreso y la indebida calificación de la jornada laboral.

Corresponde señalar que el art. 242 de la LCT dispone que una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.

Enseña Mario Ackerman que la injuria laboral es la *"conducta de las partes (acto u omisión) que afecta el vínculo laboral de un modo tal que justifica que la parte que no incurrió en ella rescinda el contrato con tal invocación. La entidad de tal afectación es habitualmente identificada como la proporcionalidad entre el acto y la sanción. Esta condición -es decir la presencia de la injuria- es necesaria y no suficiente ya que se exige, además, que la respuesta sea contemporánea u oportuna...Es injuria todo acto u omisión contrario a derecho que importe una inobservancia de deberes de prestación o de conducta, imputable a una de las partes que lesione, así el vínculo contractual..."* (Tratado de Derecho del Trabajo - Tomo IV, pág. 286).

Entonces, para erigirse en justa causa de despido, debe consistir en un incumplimiento de tal magnitud, que pueda desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 de la LCT, teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad.

En el caso de autos el actor sustentó su despido en varios incumplimientos que consideró agraviantes. Al respecto resulta importante destacar que cuando son diversas las causales invocadas en la notificación del despido, basta la acreditación de una de ellas, siempre que sea de gravedad o entidad suficiente para justificar la medida extintiva (conf. CSJT, sent. 1058/2006, "Roldán vs Instituto San Pedro"; sent. 468/2012, "Coria vs Libertad"; sent. 372/2006, "Pérez vs Cruz Alta"; sent. 197/2010, "Pons vs Plásticos"; entre otras).

Respecto a las injurias reclamadas, esto es, la deficiente registración de la relación laboral (fecha de ingreso y jornada), aquellas se encuentran acreditadas, conforme a lo valorado en la primera cuestión.

En cuanto a su gravedad, su desconocimiento repercuten sobre la remuneración al incidir de manera directa sobre los adicionales previstos por el CCT 479/06, los créditos salariales e incluso el acceso del trabajador a los beneficios previsionales una vez cumplida su edad jubilatoria.

Como consecuencia la gravedad de la injuria se encuentra acreditada, y en ese contexto y con tales precedentes, el despido indirecto devino justificado (art. 242 LCT), haciéndose por tanto la demandada responsable por las consecuencias indemnizatorias que de ello se derive (art. 246 y ccdantes. LCT). Así lo declaro.

TERCERA CUESTIÓN:

La parte actora, en la demanda (fs.05/09), pretende la suma total de \$113.259,06 o lo que en más o en menos según surja de las probanzas de autos, con más sus intereses, gastos y costas, en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, integración mes despido, vacaciones proporcionales, SAC s/vacaciones, SAC proporcional, indemnización de los arts. 8 y 15 de la Ley Nº 24013, multa de art. 80 de la LCT, y diferencias salariales.

Al haberse determinado en autos la deficiente registración del actor en la primera cuestión respecto a los extremos de la relación laboral y que el distracto se produjo por despido indirecto justificado en la en la segunda cuestión, corresponde analizar la procedencia de los rubros reclamados, conforme al art. 214 inc. 5º del CPCC, por lo cual se analizarán detalladamente cada uno de ellos:

1) Indemnización por antigüedad: La parte actora resulta acreedora de este rubro, atento a lo tratado en la I y II cuestión y por encontrarse reconocido que la extinción de la relación laboral se produjo por despido indirecto justificado (art. 246 de la LCT). Así lo declaro.

2) Sustitutiva de preaviso y su incidencia del SAC (arts. 232 de la LCT): Este rubro resulta procedente de acuerdo a lo tratado en la I y II cuestión y de conformidad a criterio sentado por la C.S.J.T. en autos caratulados “*Domínguez Rodolfo vs. Vicente Trapani*” (Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral y Contencioso Administrativo; sentencia nro. 107 del 07/03/2012) sobre el modo de consideración de la incidencia de SAC sobre el preaviso admitido.

3) Integración mes despido: La parte actora tiene derecho a este rubro atento a que la fecha de distracto 14/03/12 no coincide con el último día del mes (conf. art. 233 LCT). Así lo declaro.

4) Vacaciones proporcionales: La parte actora tiene derecho a este rubro por cuanto no se encuentra acreditado su pago. Así lo declaro.

5) SAC s/ vacaciones proporcionales: De conformidad con lo dispuesto por el art. 156 de la ley de contrato de trabajo, el salario correspondiente al período de descanso proporcional a la fracción del año trabajada, posee naturaleza indemnizatoria por lo que no corresponde el cálculo del sueldo anual complementario con motivo del cese del dependiente sobre este rubro. En este sentido debe advertirse que el SAC es un concepto que se calcula sobre las remuneraciones del trabajador (cfr. arts. 121 y 123 LCT). Por ello se rechaza el presente rubro pretendido.

6) SAC proporcional: La parte actora tiene derecho a este rubro por cuanto no surge acreditado su pago (art. 121 LCT). Así lo declaro.

7) Sanción art. 8 de la Ley N° 24013: No resulta procedente este rubro atento a que el caso de autos no constituye el presupuesto enunciado por la norma esto es la falta de registración de la relación laboral. Asimismo el actor tampoco dio cumplimiento con el requisito de comunicación a la AFIP previsto en el inc. b) del art. 11 de dicha ley. Así lo declaro.

8) Sanción art. 15 de la Ley N°24013: El citado precepto legal dispone, en lo pertinente, que en caso de que el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los dos años desde que éste le hubiere cursado, de modo justificado, la intimación prevista en el art. 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido. Asimismo, establece que dicha duplicación procederá también cuando fuere el trabajador el que hiciera denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los artículos 8, 9 y 10, y que el empleador acredite de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido. En efecto, esta multa tiene el propósito de disuadir al empleador de reaccionar ante la intimación cursada por el trabajador en los términos del art. 11, sea disponiendo el despido directo del trabajador o bien, poniéndolo en situación de despido indirecto (CSJT, sent. 261 del 14/4/2005, "Cancellieri, Ángel Marcelo vs. Indesmar S.A. s/ Cobro de pesos").

En su mérito, en virtud de lo reseñado respecto del rubro precedente, cabe tener por cumplida la exigencia formal de la intimación cursada -con las formalidades establecidas por la norma- por el accionante, por lo que cabe admitir este rubro, al haberse producido el despido sin causa dentro de los dos años de cursada la intimación pertinente.

9) Multa del art. 80 LCT: No resulta procedente el presente rubro por cuanto el actor no acreditó haber dado cumplimiento con el presupuesto de procedencia de la sanción prevista en legislación vigente, esto es, con la intimación

fehaciente en los términos y plazos previstos por el art. 80 LCT y art. 1 del Decreto 146/01. Ello por cuanto, si bien intimo mediante TCL este fue despachado antes de transcurridos 30 días desde la fecha de extinción de la relación laboral (14/03/12). Así lo declaro.

10) Diferencias salariales: Resulta procedente el presente rubro atento a lo resuelto en la Iº cuestión. Así lo declaro.

INTERESES:

Los importes que progresan devengarán intereses desde que son debidos y hasta su efectivo pago (art.128 y 149 LCT).

Con relación a su cómputo, es preciso tener en consideración que la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en la causa “Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones” (sentencia N°1422 de fecha 23/12/15) ratificó su decisión de abandonar el criterio anterior de la aplicación de la tasa pasiva promedio del B.N.A. y más recientemente, en la causa “Bravo José Armando vs. Los Pumas S.R.L. s/ Indemnizaciones” (sentencia N°686 de fecha 01/06/17) sostuvo: “En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago”.

Para así decidir el Máximo Tribunal Provincial tuvo en consideración que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional (art. 14 CN) y su crédito reviste naturaleza alimentaria; además de ello tuvo en cuenta la función resarcitoria de los intereses moratorios y la profunda vinculación entre la tasa de interés y la depreciación monetaria en las circunstancias económicas actuales.

Asimismo, en este pronunciamiento destacó la función relevante de la casación como unificadora de la jurisprudencia aclarando que “El cambio de la tasa de interés aplicable a los créditos laborales lejos está de configurar una solución “única”, “universal” o “permanente” ya que el criterio propiciado “no resulta portador de una verdad absoluta y eterna, sino que por el contrario, conlleva la realización de un juicio histórico, basado en circunstancias económicas, sociales, sociológicas y jurídicas que se verifican en este momento, dejando a salvo que no es imposible, sino probable, que en otro momento a tenor de un cambio sustancial de las actuales circunstancias, esta Corte podrá revisar el criterio que hoy se establece en materia de intereses moratorios en los créditos laborales en ejercicio de la relevante función nomofiláctica que es privativa de la casación”.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, aun cuando corresponde a los tribunales inferiores adaptar sus decisiones a los precedentes dictados por la CSJT como Máximo Tribunal Provincial, en el presente caso resulta legítimo apartarse de la solución propiciada por aquella doctrina legal, tanto por seguir los propios fundamentos que llevaron a la conclusión apuntada, como también en virtud de lo normado por el art. 9 de la LCT.

Es que cada magistrado, de conformidad a la naturaleza y rasgos de cada caso traído a su conocimiento, debe establecer la tasa de interés aplicable y el mecanismo de su implementación (conf. arts. 767 y 768 del CCCN), de modo de lograr ajustar la realidad de cada caso al sistema que demuestre mayor compatibilidad con la justicia del caso concreto y la realidad económica, de modo de acercar la solución más justa al caso concreto, en orden a que pudieren prevalecer criterios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica.

Por ello, en función de lo previsto en el art. 768 inc. 'c' del CCCN, a los efectos del cálculo de intereses de los montos de condena se aplicará en este caso particular la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina y no la tasa activa para descuento de documentos a treinta días del Banco de la Nación Argentina, pues de entre las tasas fijadas por la reglamentación del BCRA, en este caso particular, aquella tasa pasiva es la más favorable al trabajador (art. 9 LCT).

En efecto, en la cuestión traída a estudio, el promedio de la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina asciende a 1345% mientras que si aplicamos la tasa activa el porcentaje de actualización disminuye a un 444%.

Al respecto, resulta pertinente recordar lo considerado en el voto del Dr. Goane, cuando ya avizoraba esta misma situación al dictar sentencia en los autos "Sosa Oscar Alfredo c/Villagran Walter Daniel s/cobro de pesos" (CSJT, sent. N°824 del 12/06/2018): "por las condiciones fluctuantes del mercado y la economía, no es lo mismo calcular los intereses de una deuda que empezó a devengarlos hace veintitrés años, que una deuda que devenga intereses desde hace sólo dos años, los períodos históricos de tiempo y sus rasgos de normalidad o inestabilidad impactan sobre el fenómeno analizado, de hecho, y teniendo en cuenta la progresión histórica de cada tasa y un análisis comparativo de su evolución, se advierte que cuando se calculan intereses de una deuda que comenzó a devengarlos desde hace diez años o menos, la aplicación de la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos arroja resultados muy superiores a los que brinda el uso de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, sin embargo, cuando se calculan los intereses de una deuda que comenzó a devengarlos desde abril de 1991, el uso de la tasa pasiva ofrece, a la fecha, un porcentaje superior que la tasa activa".

En virtud de lo antes analizado corresponde aplicar en el presente caso la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina para los rubros derivados de la extinción del vínculo laboral desde la fecha de la mora de cada uno de los créditos admitidos hasta la fecha del vencimiento del plazo de pago de la condena aquí dispuesta, conforme lo establecido por el art. 145 del CPL.

Luego, en caso de que la demandada no cumpliera con el pago de la totalidad de la suma condenada en el plazo antes indicado, a partir de esa fecha los intereses deberán computarse utilizando la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a 30 días, por ser, por los fundamentos antes expuestos, la tasa que mejor se adecúa a los créditos laborales como los aquí condenados y según la doctrina legal antes mencionada. Así lo declaro.

PLANILLA DE CONDENA:

Ingreso	01/10/05	
Egreso	14/03/12	
Antigüedad	6 años, 5 mes y 13 días	
Categoría:	mozo Cat. III, estab. B	conforme CCT 479/06
Básico		\$ 2.497,86
Escalafón		\$ 46,46
Complemento de servicio		\$ 299,74
Asistencia perfecta		\$ 249,79
No remunerativo		<u>\$ 874,25</u>
Total		\$ 3.968,10
<u>1) Indemnización por antigüedad</u>		
	\$ 3.968,10 x 7años	\$ 27.776,70
<u>2) Indemnización sustitutiva del preaviso</u>		
	\$ 3.968,10 X 2 meses	\$ 7.936,20
<u>3) Integración mes de despido</u>		
	\$ 3.968,10 / 30 x 16 días	\$ 2.116,32
<u>4) SACs/ Preaviso</u>		
	\$ 7.936,20 /12	\$ 661,35
<u>5) Vacaciones proporcionales 2012</u>		
	\$ 3.968,10 / 25 x (21*74/360)	\$ 685,16
<u>6) SAC 1° 2012</u>		
	\$ 3.968,10 / 2 x 74/180	\$ 815,66
<u>7) Art 15 ley 24.013</u>		
	(\$27.776,7+\$7.936,2+\$2.116,32)	<u>\$ 37.829,21</u>
Total Rubros 1) al 7) \$ al 21/03/2012		\$ 77.820,60
Interés tasa pasiva promedio BCRA desde 21/03/2012 al 04/07/2023	1223,30%	<u>\$ 951.979,42</u>
Total Rubros 1) al 7) \$ al 04/07/2023		<u>\$ 1.029.800,02</u>

8) Diferencias salariales

Mes	Debió percibir	Percibió	Diferencia	% Tasa pasiva promedio al 04/07/2023	\$ Intereses
03/10	\$ 1.754,07	\$ 1.034,09	\$ 719,98	1451,01	\$ 10.447,05
04/10	\$ 1.754,07	\$ 1.034,09	\$ 719,98	1442,23	\$ 10.383,84
05/10	\$ 2.280,27	\$ 1.036,84	\$ 1.243,43	1432,60	\$ 17.813,42
06/10	\$ 2.557,81	\$ 1.036,84	\$ 1.520,97	1423,12	\$ 21.645,27
07/10	\$ 2.557,81	\$ 1.187,78	\$ 1.370,03	1413,66	\$ 19.367,60
08/10	\$ 2.650,36	\$ 1.187,78	\$ 1.462,58	1404,22	\$ 20.537,88
09/10	\$ 2.650,36	\$ 1.234,17	\$ 1.416,19	1395,48	\$ 19.762,69
10/10	\$ 2.748,65	\$ 1.234,17	\$ 1.514,48	1386,43	\$ 20.997,19
11/10	\$ 2.748,65	\$ 1.283,51	\$ 1.465,14	1377,58	\$ 20.183,46
12/10	\$ 2.841,20	\$ 1.332,82	\$ 1.508,38	1368,26	\$ 20.638,54
01/11	\$ 2.841,20	\$ 1.814,83	\$ 1.026,37	1359,17	\$ 13.950,09
02/11	\$ 2.933,75	\$ 1.607,00	\$ 1.326,75	1350,99	\$ 17.924,24
03/11	\$ 2.933,75	\$ 1.607,78	\$ 1.325,97	1341,70	\$ 17.790,52
04/11	\$ 2.933,75	\$ 1.607,78	\$ 1.325,97	1332,68	\$ 17.670,92
05/11	\$ 2.933,75	\$ 1.645,78	\$ 1.287,97	1323,64	\$ 17.048,07
06/11	\$ 3.335,89	\$ 1.782,85	\$ 1.553,04	1315,03	\$ 20.422,99
07/11	\$ 3.335,89	\$ 1.782,85	\$ 1.553,04	1306,34	\$ 20.288,03
08/11	\$ 3.535,71	\$ 1.782,85	\$ 1.752,86	1297,10	\$ 22.736,39
09/11	\$ 3.535,71	\$ 1.782,85	\$ 1.752,86	1288,12	\$ 22.578,99
10/11	\$ 3.743,28	\$ 1.782,85	\$ 1.960,43	1277,50	\$ 25.044,46
11/11	\$ 3.743,28	\$ 1.782,85	\$ 1.960,43	1264,77	\$ 24.794,89
12/11	\$ 3.968,10	\$ 1.782,85	\$ 2.185,25	1251,68	\$ 27.352,33
Subtotales			\$ 31.952,12		\$ 429.378,85

Total Rubro 8) Diferencias salariales al 04/07/2023

\$ 461.330,97

9) Diferencias sobre SAC

Mes	Debió percibir	Percibió	Diferencia	% Tasa pasiva promedio al 04/07/2023	\$ Intereses
Sac 1° 2010	\$ 1.278,91	\$ 523,13	\$ 755,78	1.432,60	\$ 10.827,25
Sac 2° 2010	\$ 1.420,60	\$ 524,45	\$ 896,15	1.377,58	\$ 12.345,17
sac 1° 2011	\$ 1.667,95	\$ 823,51	\$ 844,44	1.323,64	\$ 11.177,30
sac 2° 2011	\$ 1.984,05	\$ 891,42	\$ 1.092,63	1.264,77	\$ 13.819,25
Subtotales			\$ 3.588,99		\$ 48.168,98

Total Rubro 9) Diferencias sobre SAC al 04/07/2023

\$ 51.757,97

Resumen condena

OLAZ LUIS ALBERTO

Total Rubros 1) al 7) \$ al 04/07/2023	\$ 1.029.800,02
Total Rubro 8) Diferencias salariales al 04/07/2023	\$ 461.330,97
Total Rubro 9) Diferencias sobre SAC al 04/07/2023	\$ 51.757,97
Total General \$ al 04/07/2023	\$ 1.542.888,97

COSTAS:

Teniendo en cuenta que prosperan los rubros indemnizatorios de mayor importancia cualitativa en términos de la relación laboral y su extinción (indemnizaciones de los arts. 245, 232 y 233 LCT y los referidos a la liquidación final), pero resultan rechazados otros accesorios (SAC/s vacaciones, multas del art. 8 de la Ley N°24013 y art. 80 de la LCT) aún cuando revisten importancia cuantitativa, corresponde imponer las costas en forma proporcional a las partes considerando tanto los parámetros antes enunciados como también el resultado económico del proceso (art. 63 CPCC, supletorio conf. art. 49 CPL y la doctrina que emana de la CSJT en precedente “Santillán de Bravo vs ATANOR”, sent. 37/2019): a la demandada el 100% de las propias y el 80% de las del actor; al actor el 20% de las propias. Así lo declaro.

HONORARIOS:

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescripto en el art. 46 inc. 2 de la Ley N° 6204.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50 inciso 1) de la citada ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto condenado, el que según planilla precedente resulta al 04/07/23 la suma de \$1.542.888,97 (pesos un millón quinientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho con noventa y siete centavos).

De conformidad con lo normado por los artículos 15, 39, 40 y ccdtes. de la Ley N° 5480 y 51 del CPT, se regulan los siguientes honorarios:

1) A la letrada Ana Cristina Robles, por su actuación en autos como apoderada en el doble carácter por la parte actora, durante una etapa del proceso de conocimiento (demanda), la suma de \$119.573,90 (base x 15% más 55% por el doble carácter 1/3). Como coapoderada en las dos etapas restantes (ofrecimiento/producción de pruebas y alegatos) la suma de \$119.573,90 (base x 15% más 55% por el doble carácter 2/3), deducidos los honorarios del letrado Antonio José Giménez (art. 12 LH), arrojando un total de \$239.147,80. Por la incidencia resuelta en fecha 04/05/17, la suma de \$89.680,42 (base x 15% (art 38) x 25% (art 59) + 55%) y por la incidencia resuelta en fecha 26/08/22, como coapoderada deducidos los honorarios del letrado Giménez (art. 12 LH), la suma de \$21.523,30 (base x 6% (art 38) x 15% (art 59) + 55%).

2) Al letrado Antonio José Giménez por su actuación en autos como coapoderado en el doble carácter por la parte actora, durante dos etapas del proceso de conocimiento (ofrecimiento/producción de pruebas y alegatos), la suma de \$119.573,90 (base x 15% más 55% por el doble carácter 2/3) deducidos los honorarios de la letra Robles (art. 12 LH). Por la incidencia resuelta en fecha

26/08/22, deducidos los honorarios de la letrada Robles (art. 12 LH), la suma de \$21.523,30 (base x 6% (art 38) x 15% (art 59) + 55%).

3) Al letrado Julián Colombres, por su intervención en el doble carácter por la parte demandada, durante una etapa y media del proceso de conocimiento (responde/ofrecimiento de pruebas), la suma de \$107.616,51 (base x 9% más 55% por el doble carácter 1/½ /3).

4) Al letrado Marcelo Esteban Jiménez Santillán, por su intervención en el doble carácter por la parte demandada, durante una etapa y media del proceso de conocimiento (producción de pruebas y alegatos), la suma de \$95.659,12 (base x 8% más 55% por el doble carácter 1/½ /3). Por la incidencia resuelta en fecha 26/08/22, la suma de \$46.633,82 (base x 13% (art 38) x 15% (art 59) + 55%).

5) Al letrado Fernando A. Vera no se regulan honorarios por no haber realizado actuaciones oficiosas (art.16 LH). Así lo declaro.

Por lo expuesto,

RESUELVO:

I) ADMITIR PARCIALMENTE LA DEMANDA promovida por Luis Alfredo Olaz, DNI N°33.632.111, con domicilio en calle Venezuela N°2511, de esta ciudad, en contra de María Gabriela Bocca DNI N°21.744.950, con domicilio en calle Muñecas N° 772, Piso 15, Dpto. B, San Miguel de Tucumán, de acuerdo a lo considerado. En consecuencia, se condena a esta última al pago de la suma total de \$1.542.888,97 (pesos un millón quinientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho con noventa y siete centavos), en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso, integración mes despido, vacaciones proporcionales, SAC proporcional, indemnización del art.15 de la Ley N° 24013, y diferencias salariales, debiendo abonar dicho importe en el plazo de diez días de ejecutoriada la presente.

II) ABSOLVER a la demandada de los rubros, SAC s/vacaciones, indemnización del art. 8 de la Ley N° 24013 y multa de art. 80 de la LCT, atento a lo considerado.

III) COSTAS: Como se consideran.

IV) HONORARIOS: A los letrados, Ana Cristina Robles, por su actuación en autos principales la suma de \$239.147,80, por la incidencia resuelta en fecha 04/05/17, la suma de \$89.680,42 y por la incidencia resuelta en fecha 26/08/22, la suma de \$21.523,30; al letrado Antonio José Giménez por su actuación en autos principales la suma de \$119.573,90 y por la incidencia resuelta en fecha 26/08/22, la suma de \$21.523,30; al letrado Julián Colombres, la suma de \$107.616,51 y al letrado Marcelo Esteban Jiménez Santillán, por su intervención en autos principales, la suma de \$95.659,12 y por la incidencia resuelta en fecha 26/08/22, la suma de \$46.633,82 y al letrado Fernando A. Vera no se regulan

honorarios por no haber realizado actuaciones oficiosas (art.16 LH), atento a lo considerado.

V) PLANILLA FISCAL: Oportunamente practíquese y repóngase (art. 13 de la Ley N°6204).

VI) COMUNÍQUESE a la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán.

VII) COMUNIQUESE a la AFIP-DGI en la etapa de cumplimiento de sentencia de conformidad a lo prescrito por el art. 17 de la Ley N° 24013 y al art. 44 de la Ley N° 25345.

REGÍSTRESE, ARCHÍVESE Y HÁGASE SABER.